

### *La exclusión social y sus efectos para el desarrollo humano*

La administración “Calderón Sol” está por terminar su gestión en el gobierno y la Administración de “Francisco Flores” se prepara con hermetismo y misterio a gobernar el país por cinco años. En diferentes sectores sociales hay expectativas frente al nuevo gobierno. Estas expectativas gravitan fundamentalmente alrededor de la agenda económica y de la seguridad ciudadana, en tanto en la actual coyuntura sociopolítica se manifiestan como las más sentidas por la población salvadoreña.

Alrededor de estos temas se hace perentorio reflexionar de cara a los retos que tendrá que asumir el gobierno de “Francisco Flores”. No obstante, el punto de partida de esta reflexión se centra en el problema estructural de la *exclusión social*, en tanto sigue siendo uno de los ejes transversales que dinamizan el desarrollo del subdesarrollo nacional.

La exclusión social es un problema estructural derivado de los distintos modelos de crecimiento económico que se fundamentan material y espiritualmente en las cualidades individuales más que en las cualidades sociales del ser humano. El anhelado progreso impulsado por el sistema “capitalista” se sustenta desde sus orígenes en la relación costo–beneficio, que de forma “abstracta” fomenta la competencia entre los individuos, presuponiendo ideológicamente que en su conjunto todos poseen las mismas condiciones y oportunidades. Sin embargo, en la práctica histórica, lo que se ha fomentado —como un efecto no deseado— es la exasperación de las tendencias humanas competitivas y egoístas en detrimento de las tendencias sociales de cooperación y vida social.

En el discurso ideológico de los tecnócratas se nos ha enseñado que la clave del desarrollo económico es por antonomasia la competencia entre individuos y grupos fuertes que, rigiéndose por unas “leyes” emanadas del “mercado”, crea espacios para que su actividad económica genere riqueza y beneficios para todos. Sin embargo, nada de esto ha sido contundente en términos de desarrollo humano y lo que sí hemos obtenido es la formación de grupos minoritarios que han hegemonizado el poder del Estado, han monopolizado el manejo de la política pública a través del control de las funciones directivas de la nación, con el perjuicio de generar sistemáticamente la exclusión de los demás sectores y grupos sociales de la sociedad.

A los sectores excluidos se les han consignado ciertos espacios de participación ciudadana, consistentes fundamentalmente en lo siguiente: en primer lugar en la formalidad de asistir, cada determinado tiempo, a las urnas para emitir su voto a uno u otro grupo de poder político que nos oferta en sus discursos programáticos “*el progreso y bienestar para todos*”. En segundo lugar, a ejercer con mayor tolerancia y pluralidad, pero con menor eficacia, el derecho a expresar libremente la opinión personal y/o grupal y a ejercer el derecho a manifestarse a través de algún tipo de organización y/o movimiento. Fuera de estos parámetros, las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad salvadoreña y las posibles soluciones a los problemas estructurales que nos aquejan, está limitada a la “*clase política*” que, en el interior de los poderes del Estado, se adjudican sin más la representación del “*pueblo salvadoreño*” desde donde se legitima el poder de unos grupos y la exclusión de las mayorías.

Por lo menos eso podemos afirmar de la administración anterior. El modelo económico dominante en la administración de Calderón Sol no enfrentó los principales problemas estructurales del país, por el contrario, la falta de claridad en cuanto a sus directrices y la carencia de una auténtica voluntad política, lo que produjo fue más desequilibrios sociales y económicos con sus correspondientes efectos y amenazas para la convivencia pacífica de la población.

Evaluando este período a partir de las principales noticias expuestas por los medios de comunicación social, los acontecimientos más relevantes han sido aquellos relacionados con la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la criminalidad, la degradación gravísima del medio ambiente, la pobreza, el desempleo, la crisis económica y el problema migratorio. Obviamente, estos acontecimientos siguen demostrándonos cómo la exclusión social constituye uno de los principales motores que generan baja calidad humana para los sectores sociales mayoritarios y debilidad en el proceso democrático que se da en El Salvador.

La lucha contra la exclusión social concierne en primer lugar la adopción de un nuevo modelo de desarrollo, que garantice los espacios institucionales para la participación proactiva de todos los grupos y sectores sociales que están involucrados en las esferas del desarrollo económico y social. Se trata de inno-

var formas y de implementar medios institucionales que tiendan a equilibrar las tendencias humanas competitivas y egoístas con las tendencias humanas de cooperación y vida social, para luego garantizar mecanismos sociales que trasladen equilibradamente los beneficios en relación con la satisfacción de las necesidades de todas las personas y, no como ha sido hasta ahora, en función de garantizar el bienestar de aquellos pequeños sectores y grupos dominantes que tienen un peso decisivo en el país de acuerdo con sus propios intereses económicos y aspiraciones sociales y políticas.

En segundo lugar, la lucha contra la exclusión social requiere de una nueva voluntad política donde el gobierno debe de dar el ejemplo, dando señales claras al conjunto de la población en cuanto al manejo de la información, programación, decisión, gestión y evaluación de las políticas públicas, especialmente aquellas que tienen que ver con los servicios de información y educación, medios privilegiados y necesarios para promover la participación ciudadana dirigida a fortalecer los procesos políticos, económicos, tecnológicos y sociales que la nación necesita para ir obteniendo su propio desarrollo con rostro humano.

A nuestro parecer, el nuevo gobierno deberá materializar su discurso de desarrollo y bienestar social, tomando como uno de los principales puntos de partida los desequilibrios y perturbaciones que produce la exclusión social. Las evidencias son una clara llamada de atención al respecto, mucho más cuando presenciamos cómo esta lógica de la competitividad egoísta está llevando a personas y grupos de la masa de excluidos sociales a actuar impunemente frente al Estado de derecho. Los altos índices de violencia y criminalidad denotan un trasfondo de degradación humana, donde la dignidad y el derecho a la vida se ve socavado por la aplicación de las reglas de competencia, donde el otro ya no se le ve como un ser humano, sino como un competidor peligroso o como un objeto al que se le puede sacar provecho a corto plazo.

Frente a esta realidad se hace necesario introducir un nuevo enfoque de análisis, desde donde se podría explicar la escalada de violencia y muerte en la que vive el país como una de las consecuencias que genera la exclusión social. Desde este enfoque no es de extrañar que las personas y grupos excluidos y relegados a las esferas inferiores de la escala de poderes socialmente aceptados, motivados por el mismo medio sociocultural controlado por las personas fuertes y exitosas, quieran competir y, por ende, actúen sin ningún escrúpulo y sin ninguna reglamentación, con tal de lograr el éxito y gozar de los beneficios que por la vía legal le son sistemáticamente vetados.

El problema de estas prácticas perversas e inhumanas es que al ser recurrentes en el tiempo, terminan generando un efecto multiplicador donde las personas y grupos de excluidos socialmente terminan por excluir a su vez a aquellas personas y grupos sociales más débiles y vulnerables en la escala social. Esta realidad puede llegar a convertirse en un fenómeno incapaz de control, con lo

cual se estaría afectando aún mucho más el débil tejido social y sus respectivas redes de relaciones sociales. Frente a esta situación es fácil predecir que el gobierno podría caer en el problema de la ingobernabilidad o en prácticas autoritarias, que al final de cuentas sólo vendría a complicar mucho más el panorama.

Las políticas sociales del cualquier plan de gobierno deben encaminarse a generar y fortalecer “procesos de desarrollo humano” que, en la práctica, permitan superar la larga lista de indicadores socioeconómicos que nos siguen mostrando, con la frialdad de los “datos duros”, las condiciones de pobreza, marginación y exclusión social en la que se encuentra la mayor parte de la población salvadoreña.

Sin embargo, para lograr el éxito de las mismas es necesario y fundamental el involucramiento de todos los ciudadanos/as y no solamente del gobierno o de algunos grupos organizados en el sector público, privado o civil. La participación ciudadana implica, por tanto, la comunicación y la proyección. Desde ambas dimensiones y con el concurso de todos los grupos y sectores sociales, iremos logrando consensos claves en la larga agenda de temas de carácter nacional. No obstante, esto requiere que el gobierno nacional y local, así como los otros poderes del Estado, construyan una nueva *voluntad política*, desde donde se generen acciones que efectivamente promuevan la descentralización del poder; la superación de las actitudes y manifestaciones verticalistas; el decisionismo autoritario; la improvisación; el sectorialismo y, por último, el asistencialismo, que en sus distintas modalidades contribuyen a reforzar y legitimar, aunado con los demás elementos, la exclusión social.

El sueño de cualquier ciudadano/a es vivir en paz y en desarrollo. El nuevo gobierno tiene la obligación moral de ir haciendo realidad estas aspiraciones que, por demás, son legítimas y auténticamente humanas.